

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México, por Estéban Gonzalez, contra el comandante militar que lo destinó al servicio de las armas, siendo remitido como reemplazo por el Presidente municipal de Ixtacalco.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

O. juez:

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por el C. Estéban Gonzalez, quejándose de que fué remitido por el C. Regidor del ayuntamiento de la municipalidad de Ixtacalco, en reemplazo de un soldado del batallón del Distrito á quien no conoce, y donde fué dado de alta contra su voluntad.

Estando confirmado su dicho con el informe del ciudadano comandante militar, y siendo evidente que la consignación del quejoso no puede hacerla legalmente el C. Regidor, pues no está en sus atribuciones ni aun en las del ayuntamiento, existiendo violadas las garantías que concede la Constitución en sus arts. 5º y 19, puede el Juzgado declarar que la Justicia federal ampara y protege al C. Estéban Gonzalez.

México, Setiembre de 1872.—*Herre-
ra Campos.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Juzgado de Distrito de México.—México, Setiembre 27 de 1872.—Visto el recurso de amparo interpuesto por Estéban Gonzalez quejándose de que con violación de las garantías individuales consignadas en los arts. 5º y 16 de la Constitución política de la República mexicana é infringiendo la ley de 17 de Mayo último que dispone el modo de cubrir las bajas del ejército, se le destinó por la comandancia militar de este Distrito para que reemplazara en el pri-

mer batallón del mismo á Romualdo Turcio; el informe de aquella autoridad; lo alegado por el patrono del quejoso; lo pedido por el Promotor fiscal, y resultando de las actuaciones practicadas probado el hecho que motiva el recurso, pues el Presidente del ayuntamiento de Ixtacalco no está facultado para disponer de los vecinos de ese pueblo con el objeto que se propuso al hacer la remisión de Gonzalez; que este no tiene voluntad para ser soldado, y que este servicio no debió exigírsele ni aun por la autoridad competente sin llenar previamente los requisitos prevenidos en la citada ley de 17 de Mayo; de conformidad con lo pedido por el Promotor y dejando á salvo los derechos que el defensor de Gonzalez protesta deducir; con arreglo á lo prevenido en la frac. 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, debia declarar y declaro: que la Justicia de la Union ampara y protege á Estéban Gonzalez contra el acto que motiva este recurso: hágase saber, publíquese esta sentencia y remítase á la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El ciudadano juez lo mandó y firmó: doy fé.—*José A. Bucheli.*—*Joaquín Sanchez Gonzalez*, secretario.

Es copia que certifico.—*Joaquín Sanchez Gonzalez*, secretario

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 28 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta ciudad, por Estéban Gonzalez, contra el comandante militar de la misma, que lo destinó al servicio de las armas por haberlo remitido como reemplazo el Presidente municipal de Ixtacalco; y considerando: que esa remisión es ilegal y para ella no se observó lo dispuesto en la ley de 17 de Mayo último, por lo que la consigna-

ción de Gonzalez al ejército ataca la garantía á que se refiere el art. 5º de la Constitución federal se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 27 del próximo pasado, por el juez 1º de Distrito de esta ciudad que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Estéban Gonzalez contra el acto que motivó este recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 5 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México, por D. José Miguel Sotomayor, contra el Gobernador del Distrito que trata de hacer efectiva la disposición del poder Ejecutivo que manda salir del territorio de la República al quejoso, como extranjero pernicioso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por D. José Miguel Sotomayor, quejándose de que por el Ministerio de Relaciones se le había expedido pasaporte para salir del país como extranjero pernicioso, violándose en su persona la garantía que concede la Constitución en su art. 20. Re-

cibido el juicio á prueba, ha presentado el testimonio de diversas personas que lo trataron con ocasión de negocios mercantiles, que deponen á su favor, y las certificaciones de los Juzgados de lo criminal ante quienes se acusó de diversos delitos, por las que aparece el término de dichas acusaciones.

Util la prueba para un punto extraño al amparo, en este solo debe examinarse si el gobierno usa de facultades constitucionales al expedir el pasaporte á un extranjero, gubernativamente y sin previo juicio. Conforme al art. 33 de la Constitución, esta facultad es económica y del orden administrativo, sin deber observar las formas tutelares que establece el art. 20 de la misma Constitución, las que tienen lugar solo en los juicios criminales.

Podrá decirse que alguna vez el Ejecutivo abusará de esta prerrogativa; mas la Constitución supone el buen uso de las facultades que concede el art. 33, y que los funcionarios, particularmente los del orden superior, deben tener por mira la equidad y justicia y no las pasiones; pero aun cuando se perjudicara algún extranjero por no deber estar clasificado entre los perniciosos, no por eso debía sacrificar la Nación su autonomía, tanto mas cuanto los extranjeros vienen y permanecen en el país voluntariamente, gozando de las mismas franquicias ó mayores que los mexicanos, y con conocimiento de las facultades que al Ejecutivo concede la Constitución. Lo dicho es para demostrar que el gobierno puede libremente expulsar á los extranjeros perniciosos, considerando á los que sean laboriosos y honrados; y lo que siempre ha hecho, pues raras ocasiones usa de ese derecho y nunca sin averiguar gubernativamente la conducta del expresado.

En el presente caso, sin preocupar de una manera legal la honradez del quejoso, descansó en los informes del C. G.